

Es copia que certifico. México, Diciembre 22 de 1873.—*Lic. Emilio Ordaz* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Hidalgo por los CC. Melquiades Carvajal, Miguel Sesma y otros, contra el C. Receptor de rentas de Tepeapulco que al embargarles parte de sus bienes ha violado en ellos las garantías que les aseguran los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución federal.

PLEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Los CC. Miguel Sesma, cesionario del C. Melquiades Carvajal, Miguel López, José María Jurado, Simón y Juan Delgadillo, Nolazco Luna, Francisco Bravo, Juan Zavala, Ignacio Vecino, Pablo Valencia y Zeferino Hernández, fraccionarios de la hacienda de San José el Grande, solicitan de la Justicia federal por medio de su apoderado Lic. Ignacio Durán, se les ampare y proteja contra el C. Receptor de rentas de Tepeapulco, que al embargarles parte de sus bienes, ha violado en ellos las garantías que les aseguran los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución general.

Es un hecho probado por el documento que obra á fojas tres de estos autos, que á la solicitud que elevó el C. Lic. Manuel Piña y Cuevas al Gobierno del Estado en 1869, para que este le eximiera del pago del derecho de traslación de dominio por la venta que hizo de unas fracciones de su hacienda de S. José, recayó un acuerdo en 30 de Abril del año citado, de conformidad con la solicitud, siempre que se cumpliese con las prescripciones de la ley federal de 6 de Febrero de 1861. Lo es también por la copia certifi-

cada por el C. Receptor, que la Legislatura resolvió en 3 de Abril último hiciesen los quejosos el pago de la alcabala.

Esto basta para conocer, que las disposiciones posteriores y que obligan á los promoventes al pago, son atentatorias de las garantías de que hacen referencia en su recurso respectivo, pues ni la venta se hizo conforme á la ley federal ya citada, y al Sr. Lic. Manuel Piña y Cuevas se le eximió del pago; de conformidad con el artículo 10 de esta, ley es patente la invasión de los poderes del Estado en la esfera de la autoridad federal, en los términos de la fracción tercera del artículo ciento uno de la citada Constitución general, á la que solo toca como autoridad competente interpretar y derogar sus leyes.

Por lo expuesto y con fundamento del artículo ciento uno, fracción tercera, de la Carta política de la República, al Juzgado pido el Promotor se sirva declarar: que la Justicia federal ampara y protege á los fraccionarios de la hacienda de San José el Grande. Pachuca, Julio 15 de 1873.—*M. Sanchez*.—Una Rúbrica.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Pachuca, Julio 29 de 1873.—Visto este juicio promovido por el C. Lic. Ignacio Durán en representación de los CC. Miguel Sesma, Miguel López, José M. Jurado, Simón y Juan Delgadillo, Nolazco Luna, Francisco Bravo, Juan Zavala, Ignacio Vecino, Pablo Valencia y Zeferino Hernández, fraccionarios de la hacienda de San José el Grande, pidiendo amparo y protección contra el C. Receptor de Rentas de Tepeapulco, que les cobra derechos de traslación de dominio, por sus respectivas fracciones de la expresada hacienda, alegando que semejante providencia, invade la expresada autoridad federal, y viola las garantías de los artículos 14, 16 y 27 del Código fundamental de la República, porque la ley gene-

ral de 6 de Febrero de 1861 que no puede ser derogada por las autoridades de los Estados, exceptuó de aquel derecho las enagenaciones de que se trata, y porque dicha providencia, contraria á un acuerdo anterior del Gobierno local que dispensó á los quejosos del pago del expresado derecho, tiene efecto retroactivo, infiere una molestia en las posesiones de aquellos y ataca derechos legítimamente adquiridos que constituyen una propiedad.

Resultando de autos, primero: que en los años de 1869 y 1870, (fojas 4) el C. Lic. Manuel Pifia y Cuevas, enajenó á los quejosos 6 á sus causantes varias fracciones de la hacienda de San José el Grande; segundo: que las enagenaciones se hicieron bajo la garantía otorgada por el Gobierno provisional del C. Juan C. Doria, de no exigir por ellas el derecho de traslación de dominio, conforme á la citada ley de 6 de Febrero de 1861; tercero: que el Congreso de este Estado por acuerdo de 3 de Abril último (fojas 13) mandó hacer efectivo á los fraccionarios de dicha hacienda, aquel mismo impuesto, conforme á la fracción quinta, artículo tercero de la ley del antiguo Estado de México, de 25 de Abril de 1868 que estableció la contribucion del 3 por ciento sobre toda traslación de dominio, y cuarto: que en virtud de aquel acuerdo, el C. Receptor de Rentas de Tepeapulco dictó la providencia reclamada contra todos los quejosos con escepcion del C. Miguel Sesma por aparecer (fojas 15) haber pagado el impuesto de que se trata, desde el año de 1870.

Considerando, en cuanto al primero de los fundamentos del presente juicio, primero: que la ley del Supremo Gobierno de 6 de Febrero de 1861, cuyo artículo 10 extinguió el derecho de traslación de dominio en los casos de fraccionamiento de la propiedad, se dió con el carácter de ley general, y contra este carácter no se ha interpuesto ningun recurso, por lo que es incuestionable su vigencia en este Estado; segundo: que el acuerdo mencionado es una derogacion ó

una limitacion de la expresada ley; tercero: que la derogacion ó limitacion de las leyes generales solo puede hacerse por los Legisladores de la Federacion; cuarto: que en consecuencia, el Congreso del Estado ha extralimitado sus facultades usurpando atribuciones propias de la autoridad federal.

Considerando, en cuanto al artículo 14 constitucional, segun el que no podrán expedirse leyes retroactivas: que el acuerdo de que se trata no contiene una disposicion nueva que pretenda abrazar los casos pasados, sino que es una revocacion expresa de otro acuerdo anterior, el del C. Doria ó un acto sin relacion á este mismo acuerdo cuyo objeto fué declarar una ley vigente, por lo que no tiene realmente retroactividad.

Considerando en cuanto al artículo 27: que no tratándose en este caso de una expropiacion propiamente dicha, no puede decirse que se haya violado la garantía que otorga.

Considerando en cuanto al artículo 16: que es un principio generalmente reconocido, que ninguna autoridad puede revocar sus actos legalmente ejercidos, cuando ya constituyeron un derecho á favor del tercero, que el Gobierno provisional del C. Doria, tuvo facultad de dictar el acuerdo de que se ha hecho mencion en favor de los fraccionarios de la hacienda de San José el Grande, que en esta virtud, el Congreso del Estado que representa la misma persona moral, no ha tenido causa legal para revocar aquel acuerdo, y que en consecuencia, se ha inferido á los quejosos un agravio en sus intereses, sin los requisitos del artículo 16 citado.

Considerando respecto del C. Sesma: que la providencia reclamada no le comprende, por resultar de autos haber satisfecho el impuesto que se cobra á los demas, por otra disposicion emanada tal vez de distinta autoridad contra la que hoy se procede.

Considerando por último, primero: que el efecto de las sentencias de amparo es reponer las cosas al estado que guardaban antes

de infringirse la Constitucion (artículo 34 de la ley de 20 de Enero de 1869;) y segundo: que para que esta disposicion sea una verdad práctica y surta todos sus efectos, es indispensable reponer á los agraviados en el estado que guardaban sus intereses antes de ejecutarse el acuerdo reclamado, indemnizándoles la autoridad responsable de los daños y perjuicios que hayan experimentado por efecto necesario del referido acuerdo.

Por las razones expuestas, y de conformidad con los artículos 101, fraccion primera y tercera, y 16 de la Constitucion general, se decreta, primero: la Justicia de la Union ampara y protege á los CC. Miguel Lopez, José María Jurado, Simon y Juan Delgadillo, Nolazco Luna, Francisco Bravo, Juan Zavala, Ignacio Vecino, Pablo Valencia y Zeferino Hernandez, contra la providencia del C. Receptor de Rentas de Tepeapulco que los exige el derecho de traslacion de dominio, por las fracciones que han adquirido de la hacienda de San José el Grande; segundo: no se ampara ni protege al C. Miguel Sesma contra la expresada providencia, porque no le comprende, y tercero: el efecto de esta sentencia comprenderá la indemnizacion á los quejosos, por parte de la autoridad inmediatamente responsable, de los daños y perjuicios que se les han originado con el acto reclamado.

Hágase saber, publíquese, compúlsense los testimonios respectivos para el Semanario Judicial, exíjase la reposicion del papel sellado y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para la revision de esta sentencia, que pronunció y firmó el C. Lic. Miguel Mejía, Juez de Distrito de Hidalgo. Doy fé.—*Miguel Mejía*.—Una rúbrica.—*Francisco Briseño*.—Una rúbrica.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto 22 de 1873. Visto el recurso de amparo que en 20 de Junio de este año, promovieron en Pachuca ante el Juez de Distrito del Estado de Hidalgo, los CC. Miguel Sesma, cesionario del C. Melquiades Carbajal, Miguel Lopez, José María Jurado, Simon y Juan Delgadillo, Nolazco Luna, Francisco Bravo, Juan Zavala, Ignacio Vecino, Pablo Valencia y Zeferino Hernandez, diciendo: que en el año de 1869 el Lic. D. Manuel Piña y Cuevas, propietario de la Hacienda llamada San José el Grande, determinó fraccionar esta finca para venderla en lotes á diversas personas; que los promoventes bajo el amparo de la ley de 6 de Febrero de 1861 que exime del pago del derecho de traslacion de dominio á la venta de esa clase de fracciones, y además confiados en una resolucion expresa, de que no se pague ese impuesto en los contratos que se hicieron enagotando los lotes, pronunciada por el Gobierno del Estado, compraron fracciones de la Hacienda referida; que habiendo declarado posteriormente la Legislatura del Estado por un acuerdo, que debía cobrarse el impuesto expresado, de cuyo pago los promoventes como se ha relatado, estaban exentos, ese impuesto se les está cobrando por la Receptoría de Rentas de Tepeapulco, violando en sus personas las garantías que otorgan los artículos 14, 16 y 27 de la Constitucion federal, porque se les aplica una ley retroactiva sin fundamento legal, y atacando derechos adquiridos; siendo á la vez el acuerdo de la Legislatura, una invasion de la autoridad de un Estado en la esfera de la autoridad federal. Vistas las constancias de autos, y atenta la sentencia del Juez de Distrito que concede á los promoventes, menos al primero, el amparo que piden en los términos que expresa la misma sentencia. Considerando: que si bien la Legislatura, atendida la materia sobre que versa la ley de 6 de Febrero de 1861,

ha podido derogar sus disposiciones, esa declaracion conforme á derecho no es aplicable á hechos ocurridos antes de ella, porque eso seria darle efecto retroactivo contra lo prevenido en el artículo 14 de la Constitucion.

Por los fundamentos expuestos que demuestran la violacion respectiva de garantías alegadas, y teniendo en consideracion que el quejoso Sesma ha satisfecho el impuesto cuyo pago se resiste, y para cuyo no pago se solicita el amparo. Con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente: Primeró: Se confirma la sentencia del Juez de Distrito del Estado de Hidalgo pronunciada en Pachuca á 29 de Julio último, declarando: que la Justicia de la Union, esceptuando al C. Serna, ampara y protege á los demas ciudadanos que han promovido este recurso de amparo, contra la providencia del Receptor de Rentas de Tepeapulco, en virtud de la cual les exige el derecho de traslacion de dominio por las fracciones que han adquirido de la hacienda de San José el Grande, segun han manifestado en su escrito primero presentado en este juicio. Segundo: se confirma la misma sentencia en la parte que desampara al C. Serna, por falta de materia para el recurso. Tercero: Se revoca el fallo en la parte que habla de daños y perjuicios á los quejosos, estándose á la declaracion que en lo general hace sobre el amparo la presente sentencia.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del*

Castillo Velasco.—*M. Aza.*—*S. Guzman.*
Luis Velasquez.—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, 19 de Setiembre de 1873.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por el C. Antonio García, contra la orden del C. Capitan de ese Puerto, relativa á que se destruyesen las cercas que el quejoso tenía establecidas en las lagunas del Cimarron y de Mandinga.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Antonio García ha promovido este juicio de amparo y proteccion contra una orden dictada por el C. Capitan de este Puerto y ejecutada por el C. cabo de mar de Boca del Río, Luis Martínez, para que se destruyesen las cercas que el quejoso tenía establecidas en las lagunas del Cimarron y de Mandinga con el objeto de aprovecharse de la pesca exclusivamente, de conformidad con los contratos celebrados con la Municipalidad de dicho pueblo y con los Sres. Velasco hermanos y D. Manuel A. Rojas, cuya providencia fué fundada en la jurisdiccion que le conceden el artículo 85 tratado quinto, libro sétimo de la Ordenanza general de la Armada, y artículos 7, 10, 11 y 13 título quinto de la ordenanza de matrículas; y el ocurso se apoya en los artículos 4 y 16 de la Constitucion federal y otras leyes comunes relativas á los contratos y á la manera de proceder para que puedan ser debidamente anulados. Sin embargo de no estar el ocurso suficientemente sostenido